

Críticas, autocríticas, mitos y peligros.

Gonzalo Winter.

1. Más que una derrota electoral:

Sería un error leer el resultado de la segunda vuelta solamente como una derrota electoral. Creo que lo primero que debemos asumir para hacer un análisis que resulte útil, es que 7,2 millones de electores deben tener sus razones

Lo del domingo recién pasado es una señal política profunda: expresa un importante desgaste del proyecto progresista, sus valores, y su capacidad de convocar a amplios sectores .

Ganó una narrativa capaz de ordenar miedos, frustraciones y preocupaciones reales. Ahora bien, perder una elección no implica perder la razón histórica. Y a su vez, negar las razones de la derrota, reducirlas a errores tácticos o a factores anecdóticos, sí es un error político que compromete el futuro.

Este documento no pretende explicar las razones del , analizar la candidatura, o hacer un balance al gobierno del presidente Boric. Aspira a algo más acotado: hacerse cargo de los mitos y falacias que están dando vueltas. Propone separar verdades incómodas que debemos aceptar, por doloroso que sea, de falsedades que nuestros adversarios quieren instalar de manera interesada.

2. ¿Qué críticas podemos aceptar y cuáles no?

Debemos resurgir forjados por la autocrítica, para eso es necesario entender que gran parte de las críticas que vamos a recibir son necesarias y contienen verdades, pero hay otras que vienen de nuestros adversarios de manera deshonestas, y no tienen como objetivo que nos forjemos, sino que destruir a la izquierda, y allí, el Amplio será el principal señalado, no porque sea el mayor culpable, sino porque nuestros adversarios tienen buenas razones para seguir viendo en el Frente Amplio una colectividad cuya potencia les parece amenazante. Basado principalmente en sus relativos éxitos en las últimas elecciones, y en el haber alcanzado rápidamente el gobierno.

Vamos por punto.

2.1 Convención Constitucional:

2.1.1 lo que sí corresponde atender

Existió una **falta de cuidado del proceso**. Hubo gestos simbólicos que, en vez de ampliar apoyos, alimentaron temor e incertidumbre en sectores amplios de la ciudadanía. El proceso no siempre fue consciente de que la legitimidad no se agota en la razón, sino que también se construye desde la confianza. La idea de que había una vieja política “acartonada” que debía ser reemplazada por algo distinto, terminó sintiéndose hacia afuera como algo que no tiene el rigor que se exige al trabajo, algo relajado. No digo que no se haya trabajado, digo que se proyectó aquello, casi con esmero.

También ocurrió que ideas profundamente arraigadas en las necesidades materiales de las mayorías, como mejores pensiones, mejor salud, educación digna, se mezclaron con maximalismos y particularismos más propios de vanguardias intelectuales, inclusive académicas o políticas que de los malestares cotidianos de la ciudadanía. Muchos de los actores responsables de esto, hoy ya no existen como tales, sin embargo, como Frente Amplio no fuimos capaces de hacer lo necesario para evitarlo, y allí nos cabe una responsabilidad.

El proceso, además, **se volcó sobre sí mismo**. No interactuó de forma virtuosa con un escenario político que estaba cambiando aceleradamente tras la pandemia ni con el resto de los actores políticos. Mientras se zanjaban redacciones, la política seguía ocurriendo por fuera. Existieron mentiras deliberadas por medios de comunicación masivos y redes sociales, sin duda, pero también se propagaron porque se contribuyó a construir un marco mental que las hacía creíbles. Un ejemplo útil por lo gráfico es la negativa a poner un marco y límites de acción a la justicia indígena, cuestión bastante lógica, hacía imposible desmentir —texto en mano— la teoría del todo ilógica de que si te mataba un indígena lo iba a absolver otro indígena sin motivo.

Hubo, asimismo, un **fetichismo antipolítico en torno a los independientes** que no se frenó cuando aún era posible hacerlo. Se instaló la idea de que lo independiente, por sí mismo, otorgaba legitimidad al acuerdo del 15 de noviembre y al proceso, y en vez de enfrentar críticamente esa noción, la dejamos pasar porque creímos que dotaría al proceso de legitimidad. Comprendíamos la idea de que si la “clase política” era la impugnada, la ciudadanía tenía derecho a no dejarse representar por ella. Pero con ello se renunció parcialmente a hacer política, siendo nosotros un partido político.

Se cometió también el error de **pensar la mayoría como algo permanente: un mandato popular inalterable**. Se creyó que la mayoría expresada en la elección de mayo de 2021 no era permeable ni estaba sujeta a cambios, agentes externos o transformaciones del contexto. No entender que toda mayoría es circunstancial, incluso cuando nos va bien, es un error estratégico profundo. Tuve la oportunidad de presentar esta preocupación a principios de 2022 en un documento que envié al partido en el que establecía que no era ni deseable ni necesario arrasar en la convención, usando la mayoría que se tenía. Proponía que no era deseable por cuanto necesitábamos que el debate constitucional quedara cerrado y que todos los actores le dieran legitimidad al nuevo instrumento y que no era necesario, porque

era absurdo pretender instalar la totalidad de tus ideas en la Constitución, en donde muchas de las cosas que se defendieron, tampoco eran nuestras ideas.

Otro error que debemos aceptar fue la falta de diálogo político, incluso con **sectores razonables de la derecha**, pese a que era evidente que una Constitución necesita ser tan legítima que legitime todo lo que de ella emerja. **La "hoja en blanco" era para una nueva Constitución, no para un nuevo país.** Fácticamente, partir desde cero como sociedad es imposible, y no asumirlo debilitó el proceso.

Finalmente, se cometió el error de creer que, por contar con dos tercios, se podía excluir a un tercio, especialmente cuando ese tercio detentaba un enorme poder económico, mediático y cultural, y sobre todo, cuando esa exclusión no era necesaria para avanzar.

Estas fallas se enlazan con problemas más generales: desorden político y déficit de conducción, ambigüedades en materias sensibles como seguridad, migración y orden público, una tendencia a moralizar más de lo que se proponía y una incapacidad de incorporar con rapidez los cambios que dejó la pandemia.

2.1.2 Lo que no corresponde aceptar

Dicho todo lo anterior, hay críticas que no corresponde aceptar porque no son autocrítica, sino relato del adversario.

No es cierto que el Frente Amplio haya manejado la Convención Constitucional, fue un órgano plural, fragmentado, y muchas veces conflictivo, incluso entre quienes compartían horizontes transformadores. El Frente Amplio representó el 11% de la Convención Constitucional, es decir, no tenía control sobre el 89% de los convencionales que participaron allí. A diferencia del segundo proceso constitucional, liderado por el Partido Republicano, en donde un solo partido controlaba el 44% del órgano electo.

No es cierto que el Frente Amplio haya sido un símil de la Lista del Pueblo ni que haya buscado articulación política con ellos, como sí hicieron otras colectividades. Se le asigna al Frente Amplio una relevancia absoluta del proceso, cuando en los hechos tuvo una cantidad de escaños similar al Partido Socialista, y en general, estuvieron en posiciones similares.

No fue un error intentar cambiar la Constitución, vimos por años como ella fue un freno al cambio democrático. Tampoco fue un error haber buscado una salida institucional al estallido social. El país previo no era justo ni estable, y negar eso es falsear la historia reciente.

No podemos aceptar la idea de que quienes impulsamos una salida institucional a la crisis somos responsables de la violencia. **Esa tesis invierte la carga de la prueba y absuelve a quienes gobernaron durante décadas un país profundamente desigual.**

Tampoco es cierto que la crisis social chilena comience con el Frente Amplio, ni que la voluntad de transformación haya sido un capricho ideológico. Aceptar esas afirmaciones equivale a asumir, sin disputa, el marco interpretativo de nuestros adversarios.

2.2.- Estallido social

2.2.1 Críticas que debemos atender

Uno de esos errores fue la **ausencia de una condena explícita y consistente a los hechos sencillamente delictuales y no de protesta ocurridos en el contexto del estallido**. En muchos momentos se optó por el silencio, la ambigüedad o una comprensión excesiva, sin trazar con claridad un límite político. Eso generó desconcierto en sectores amplios de la ciudadanía y debilitó la capacidad de conducción.

Fuimos pasivos (no autores) ante una **valoración excesiva del espontaneísmo**. Se sobreestimó la capacidad de conducción de la autoorganización, como si fuera suficiente en sí misma, sin asumir que los procesos sociales, cuando no cuentan con conducción política, tienden a dispersarse, fragmentarse o ser capturados por dinámicas ajenas a sus causas originales.

También fuimos pasivos ante la **teoría de que había surgido un “nuevo pueblo”** a partir del estallido, como si se tratara de un sujeto homogéneo, con conciencia política clara y orientación progresista definida. Esa lectura confundió un estallido de malestar profundo con la existencia de una hegemonía social consolidada.

A ello se sumó una **falta de rigurosidad frente a la circulación de noticias falsas**. Muchas afirmaciones se difundieron sin el debido contraste, por la gran cantidad de noticias y hechos que ocurrían, en un contexto en que se violaron gravemente los Derechos Humanos. Esa permisividad erosionó la credibilidad del campo progresista.

Finalmente, se interpretó el estallido como una **señal inequívoca de hegemonía progresista**, cuando en realidad fue una explosión de descontento transversal, sin dirección política clara ni proyecto común articulado. Confundir malestar con mayoría política fue un error de diagnóstico que tuvo consecuencias posteriores.

Asumir estos errores no implica renunciar a comprender el estallido ni negar sus causas estructurales. Implica, precisamente, tomarlas en serio, aprender de ellas y construir una política capaz de combinar orden democrático, conducción y justicia social.N

2.2.2.-Lo que no podemos aceptar

Así como corresponde asumir errores, hay tesis que **no podemos aceptar**, porque no son críticas honestas, sino intentos de reescribir el conflicto social para clausurarlo políticamente.

No podemos aceptar la **tesis de la intervención extranjera** como explicación del estallido social. Esa idea busca desplazar las causas internas del conflicto y presentar la crisis como un fenómeno importado o inducido desde fuera. No existe evidencia seria que sostenga esa afirmación. Su función es política: negar responsabilidades estructurales y convertir el malestar social en una conspiración. Y omite que un 85,8% de las personas estaba de acuerdo con el movimiento social.

Tampoco podemos aceptar la reducción del estallido a **mera violencia o delincuencia**. Hubo violencia, y ya se han asumido los errores respecto de cómo se enfrentó políticamente. Pero reducir todo el fenómeno a violencia es una forma de negar su dimensión social, económica y política. Esa lectura impide comprender por qué millones de personas se movilizaron y por qué el sistema institucional entró en crisis.

No es aceptable sostener que el estallido fue **organizado por los partidos de izquierda**. Esa afirmación no solo es falsa, sino francamente estúpida e invierte la carga de la prueba. El estallido fue un fenómeno masivo, descentralizado y heterogéneo, sin conducción unificada ni dirección política clara. Atribuirlo a una conspiración partidaria es una forma de criminalizar la disidencia social y deslegitimar cualquier demanda de cambio y sobre todo de convertir cualquier evento negativo ocurrido durante el estallido en una obra imputable a la izquierda.

Tampoco podemos aceptar la idea de que el estallido constituyó un **golpe de Estado**. Lejos de ello, la salida a la crisis se dio mediante herramientas institucionales: acuerdos políticos, reformas constitucionales y plebiscitos. Equiparar movilización social con golpe de Estado trivializa el concepto y busca justificar respuestas autoritarias y hacer un equivalente moral entre lo realizado por la derecha de manera consciente entre 1973 y 1990 con una movilización ciudadana que llegó a tener 85% de simpatía en la ciudadanía.

Es inaceptable afirmar que **no existían motivos para el descontento**, o que el malestar no estaba justificado. Chile acumulaba desigualdades profundas, abusos estructurales, precarización de la vida y una sensación extendida de injusticia. Negar ese malestar equivale a negar la realidad social previa al estallido.

Tampoco corresponde aceptar la tesis de que la **crisis institucional fue causada por el estallido**. La relación es inversa: el estallido es consecuencia de una crisis institucional prolongada, marcada por déficits de representación, desigualdad y deslegitimación de las élites. Culpar al estallido de la crisis es confundir el síntoma con la enfermedad.

No podemos aceptar, bajo ningún punto de vista, que se relativicen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período. Están acreditadas por organismos nacionales e internacionales. Minimizar, justificar o poner en duda esos hechos no es una postura política legítima, sino una negación de estándares democráticos básicos.

Finalmente, **tampoco es aceptable la idea de que el 25 de octubre fue el único momento "puro" o legítimo del estallido** (omitiendo la violencia que

existió ese día), como si todo lo demás fuera desviación o error. Esa lectura romantiza un día y deslegitima el proceso completo, ocultando tanto sus tensiones como su profundidad social. El estallido fue un fenómeno complejo, contradictorio y prolongado, con cabildos y otras instancias deliberativas mayoritarias.

Rechazar estas tesis no implica negar errores ni idealizar el proceso. Implica defender una interpretación democrática del conflicto social, que no criminalice el malestar ni la esperanza de un cambio, no justifique la violencia estatal y no clausure el debate sobre las causas profundas de la crisis chilena expresadas en ese hito.

2.3. Inseguridad y miedo cotidiano

2.3.1.- Qué crítica debemos atender:

En materia de crisis de inseguridad, hay críticas que la izquierda debe atender con seriedad. No para asumir el marco de la derecha, sino precisamente para disputar el problema desde una perspectiva democrática y popular.

La comprensión de las causas estructurales —desigualdad, exclusión, segregación— es indispensable, pero resulta insuficiente cuando el miedo es presente, cotidiano y concreto. El crimen organizado, la extorsión y la circulación de armas han producido una sensación extendida de abandono estatal, especialmente en los barrios populares. Ese miedo constante no solo deteriora la vida cotidiana, sino que también abre espacio a discursos de crueldad, venganza y soluciones autoritarias.

Hay razones históricas que explican parte de esta dificultad. Las izquierdas arrastran una desconfianza histórica hacia el uso de la fuerza estatal, marcada por más de un siglo en que la clase trabajadora organizada fue objeto de violencia estatal con un sentido claramente clasista, orientado a su desarticulación. Esa memoria política es real y legítima. Pero no puede convertirse en un marco rígido que impida comprender que la situación exige respuestas diferentes.

En mayo de 2017 escribí en una columna llamada "*Víctimas de la delincuencia, una deuda de la izquierda*", en la que señalaba que las víctimas no tenían el protagonismo que merecían en nuestra conversación política. Es cierto que durante mucho tiempo, la izquierda progresista se aproximó al fenómeno del delito casi exclusivamente desde la perspectiva sus causas. Esa mirada es necesaria en un país con abusos como el uso excesivo de la prisión preventiva y un sistema penal desigual, pero insuficiente en un país en donde el robo, las extorsiones y el miedo cotidiano iban en ascenso.

A esto se suma que la **seguridad quedó en la periferia de la discusión** durante la campaña presidencial y en el programa de Apruebo Dignidad de 2021. No porque no importara, sino porque no estaba entre las prioridades del debate post-estallido y post-pandemia, en parte también por la disminución de delitos durante la pandemia.

Cuando la izquierda no aborda con claridad un dolor real del mundo popular, ese dolor no desaparece, se desplaza y termina siendo capitalizado por sectores demagógicos y autoritarios de derecha, que ofrecen respuestas simples y falsas a problemas complejos, pero emocionalmente urgentes.

Atender esta crítica no implica abandonar la defensa de los derechos humanos ni caer en el punitivismo. Implica asumir que sin seguridad no hay igualdad real, ni democracia posible, y que sin respuestas concretas al miedo cotidiano, cualquier proyecto transformador queda incompleto.

2.3.2.- Qué crítica no podemos aceptar

No podemos aceptar la idea de que todo lo anteriormente dicho tendría consecuencias directas y automáticas en política pública y que, por lo tanto, el alza de la inseguridad sería culpa de la izquierda. La inseguridad es un fenómeno complejo, de larga data, con múltiples factores, y no puede ser atribuida mecánicamente a un sector político. Cosa que ha hecho por décadas, buscando réditos electorales, la derecha, sosteniendo la idea de que la delincuencia sube por complicidad del gobierno. Esta táctica fue protagónica durante los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet.

Tampoco es aceptable sostener que la crisis de seguridad fue causada por el gobierno de Gabriel Boric. Al contrario: es el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en años, tanto en recursos, legislación, coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades. Discutir la eficacia de esas medidas es legítimo; atribuirle el origen de la crisis es simplemente mentiroso.

No podemos aceptar la tesis de que la crisis de seguridad fue causada por el estallido social. Esa explicación vuelve a confundir consecuencia con causa. El avance del crimen organizado, la violencia armada y la extorsión responden a procesos más largos, regionales y estructurales, que exceden ampliamente el ciclo político iniciado en 2019.

Tampoco es aceptable afirmar que la crisis de seguridad es consecuencia de una supuesta deslegitimación de las fuerzas de orden durante el estallido, como si un clima político crítico o un tuit post-estallido fueran la causa del debilitamiento institucional. Lo que existió fue un clima de deslegitimación general previo y profundo, y hoy se intenta invertir la relación causal para limpiar responsabilidades.

No podemos aceptar que se nos responsabilice de la crisis de seguridad cuando la deslegitimación institucional se acumuló durante años a partir de hechos graves: los casos Penta y SQM, ASIPES, el Pacogate, generales directores, directores generales procesados por corrupción, carabineros procesados por homicidio como en el caso Catrillanca, otros procesados por montaje de pruebas falsas como en la Operación Huracán, militares procesados por robo, parlamentarios procesados por legislar a la medida de quienes los sobornan, decenas de sacerdotes procesados por abusos sexuales, y hoy incluso ministros de la Corte Suprema investigados por recibir sobornos. Eso sí que erosiona la legitimidad de las instituciones.

Más allá de las políticas públicas necesarias para perseguir y castigar el delito, no podemos aceptar que se niegue la discusión de fondo: cómo es posible que, después de años de crecimiento económico sostenido, un sector tan amplio de la sociedad chilena haya terminado marginalizado, permeable primero por el neopren, luego por la pasta base y hoy por otras sustancias, sobreviviendo en economías del narco y la violencia. Negarse a discutir esto es una decisión política inaceptable.

Las derechas rechazan sistemáticamente esa conversación porque implica reconocer que el crecimiento económico por sí solo, sin enfrentar la desigualdad, genera un daño estructural al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Ese es un debate que no quieren dar.

Tampoco podemos aceptar la idea de que la única acción estatal con impacto en la seguridad es la punitiva. La persecución penal es necesaria, pero insuficiente. Sin políticas redistributivas, de vivienda, educación, integración urbana y oportunidades reales, la seguridad se vuelve frágil y reactiva.

Finalmente, no podemos aceptar que se nos impute estar “a favor de los delincuentes” por legislar de manera racional frente a proyectos mal diseñados, demagógicos o derechamente absurdos, que de aplicarse podrían generar el efecto contrario: un Estado debilitado y un país de rodillas frente al narcotráfico.

2.4. Migración

2.4.1.- Qué crítica debemos atender.

La defensa de los derechos humanos de las personas migrantes es irrenunciable, pero no puede formularse ignorando los impactos materiales reales que la migración masiva ha tenido en el país, y sobre todo en sectores populares. Cuando esos efectos no se reconocen, el discurso humanitario se vuelve abstracto y se desconecta de la experiencia cotidiana.

Entre esos impactos están la **competencia laboral a la baja**, especialmente en empleos precarios; la **saturación de servicios públicos** ya debilitados; y **cambios culturales abruptos** en comunidades frágiles que no contaron con políticas de integración ni apoyo estatal. Todo esto ha producido una sensación extendida de injusticia distributiva, donde los costos parecen recaer siempre sobre los mismos.

Desde las izquierdas hemos sostenido una posición profundamente humanitaria, que identifica con razón en el racismo y la discriminación arbitraria una degradación total del ser humano. Sin embargo, esa posición **no se adelantó a las consecuencias** de la migración masiva que Chile comenzó a experimentar con fuerza desde 2018. Se reaccionó tarde y, en muchos casos, de forma defensiva.

Finalmente, no estuvo suficientemente presente la discusión sobre la **permeabilidad de nuestros barrios al crimen organizado extranjero**, especialmente en territorios abandonados por el Estado que ya disputaba el crimen

organizado nacional. Esto no refiere al gobierno del Presidente Boric, sino a una omisión más larga en nuestra construcción política como Frente Amplio, como izquierda, y como Estado. Así como pasó con la discusión sobre el control migratorio, no haber puesto este problema en el centro dejó espacio para que otros lo instrumentalizaran desde el miedo y el racismo.

Asumir estas críticas no implica renunciar a principios, sino precisamente **hacerlos efectivos en la realidad**, evitando que la falta de respuestas concretas transforme un compromiso ético en una debilidad política.

2.4.2.- Que crítica no podemos aceptar

En materia migratoria, hay afirmaciones que **no podemos aceptar**, porque buscan trasladar responsabilidades estructurales hacia quienes no las tienen y ocultar decisiones tomadas por otros actores con poder real.

No podemos aceptar la idea de que las distintas olas migratorias que ha vivido Chile sean responsabilidad de la izquierda. Cada una de ellas tiene explicaciones específicas, económicas y geopolíticas, que no dependen de nuestra acción política. Reconocer errores en la gestión y en el debate público no equivale a asumir causas que no nos corresponden.

Más en general, no podemos aceptar que se oculte que la llegada de trabajadores extranjeros forma parte de un **proyecto económico más amplio**, que busca sostener el funcionamiento de la economía reemplazando trabajo local por trabajo más vulnerable y peor remunerado. Ese diseño precede a la izquierda y responde a una lógica de mercado que ve la migración sólo como variable de ajuste, y en donde las organizaciones como la Cámara chilena de la Construcción y la Sociedad Nacional de Agricultura permanentemente nos recuerdan que buscan ese proyecto.

En la misma línea, no podemos aceptar que se nos responsabilice por decisiones de política migratoria como la **visa de responsabilidad democrática**, que generó un fuerte efecto llamada, particularmente en el caso venezolano. Esa política fue impulsada desde otros sectores y tuvo consecuencias previsibles que hoy algunos intentan endosar retrospectivamente a la izquierda.

Aceptar estas imputaciones implicaría borrar a los verdaderos responsables, absolver a quienes promovieron activamente estas políticas y cargar sobre los sectores progresistas los costos sociales de un modelo que no diseñaron.

2.5.- Economía:

2.5.1.- Qué podemos aceptar

En materia económica, hay una crítica que la izquierda debe asumir. Mientras la derecha ofrece una teoría básica, interesada y desactualizada basada casi exclusivamente en una idea: bajar impuestos a los más ricos. La izquierda no ha logrado instalar una propuesta coherente de crecimiento para el Chile del futuro.

El problema no es menor, porque el contexto económico global cambió de manera profunda desde mediados de la década de 2010. El comercio mundial crece hoy más lento que el PIB global; la inversión extranjera directa es más volátil e incierta; y las cadenas globales de valor dejaron de expandirse como lo hicieron durante las décadas previas. El escenario que permitió crecer “subiéndose” a la globalización ya no es el mismo.

Esto no ocurre por azar. Es el resultado de crisis sucesivas —la financiera de 2008, la pandemia, las guerras, la crisis energética— y de una reconfiguración geopolítica marcada por la disputa entre Estados Unidos y China, las sanciones cruzadas y la conformación de bloques más cerrados. A ello se suma una nueva prioridad: seguridad y resiliencia. Los países buscan no depender de un solo proveedor y están dispuestos a pagar más por la estabilidad. En ese marco, la política industrial vuelve al centro, con Estados que subsidian, relocalizan y protegen sectores estratégicos.

No estamos frente a una desglobalización pura. Lo que vivimos es una globalización más lenta, más regionalizada y más selectiva. La integración sigue siendo fuerte en datos, finanzas, servicios y tecnología, pero es mucho más frágil en la manufactura hiperfragmentada que dominó entre los 90 y 2008.

En este escenario, la izquierda no ha logrado todavía articular una respuesta económica clara y convincente, la derecha menos aún. No basta con criticar el modelo anterior ni con reivindicar derechos sociales si no se explica cómo generar crecimiento, productividad y empleo en un mundo distinto. Esa falta de claridad —esa ausencia de una narrativa económica sólida para el nuevo contexto global— es una urgencia.

A la propuesta simplista de la derecha se le debe oponer una propuesta económica capaz de combinar crecimiento, transformación productiva, justicia social y soberanía económica en un mundo que ya no funciona como antes.

2.5.2.- Qué no podemos aceptar

En economía no podemos aceptar la idea de que el estancamiento productivo de Chile sería consecuencia de políticas redistributivas impulsadas por gobiernos progresistas. Esa tesis no sólo es falsa empíricamente, sino que cumple una función política muy clara: absolver al modelo económico vigente de sus propios límites y cargar la responsabilidad del estancamiento sobre quienes han intentado corregir sus efectos más injustos, que son finalmente un problema para el desarrollo nacional.

El estancamiento productivo chileno no comienza con gobiernos de izquierda ni con políticas redistributivas. Es un fenómeno de larga data, asociado al agotamiento de un modelo de desarrollo que apostó a la desindustrialización, la primarización de la economía y la concentración del poder económico. Pretender que la redistribución frena el crecimiento es invertir la causalidad: el problema no es que se haya redistribuido demasiado, sino que se dejó de transformar la estructura productiva.

La evidencia comparada refuerza este punto. Los resultados electorales recientes muestran que no existe una relación mecánica entre indicadores macroeconómicos y apoyo político. En Chile, un gobierno de izquierda logró controlar la inflación y aun así pagó costos electorales.

Sin industrialización, sin política productiva, sin ciencia y tecnología, sin trabajo digno, la redistribución aparece caricaturizada como administración de escasez. Pero esa caricatura es funcional al adversario. La tarea no es abandonar la redistribución, sino volver a hablar con fuerza de creación de valor, desarrollo, soberanía económica y transformación productiva. Crecer y distribuir no son opuestos; separarlos es parte del relato neoliberal, y es lo que produce también barrios vulnerables al narco y estallidos sociales.

Fue la izquierda, a través de proyectos como el Frente Popular, la que impulsó CORFO y una estrategia de desarrollo nacional. Fue la derecha, durante la dictadura, la que despojó al Estado de sus empresas estratégicas y privatizó el patrimonio público. Entre 1973 y 1989 se vendieron decenas de empresas de CORFO, con pérdidas patrimoniales millonarias, transfiriendo activos estratégicos a grupos económicos cercanos al régimen. Ese proceso no generó un empresariado dinámico y diversificado, sino una élite concentrada, rentista y poco dispuesta a asumir riesgos productivos.

El problema del desarrollo chileno no es el exceso de democracia ni de redistribución, sino la concentración del poder económico y político. Las colusiones, la falta de competencia real y la estrechez del espacio empresarial muestran que la capacidad emprendedora de la sociedad excede largamente a una élite que no da el ancho para el futuro. No es la primera vez que los intereses de una élite chocan con las necesidades del desarrollo: ocurrió también con el latifundio antes de la Reforma Agraria, que incluso sectores liberales de derecha reconocían como un obstáculo para una agricultura moderna y productiva.

La desconcentración del poder es, por tanto, una cuestión de desarrollo. Así como el latifundio no era capaz de hacer producir la tierra, el actual marco de incentivos de nuestra economía no es capaz de diversificar lo que produce, ni de apostar por nuevos sectores estratégicos. De hecho, el Estado ha puesto incentivos en un sentido contrario.

Por eso no podemos aceptar que se nos diga que la redistribución es la causa del estancamiento. El problema es más profundo: un modelo agotado, una globalización que cambió de forma, y una estructura de poder que bloquea la transformación productiva. Avanzar hoy no significa renunciar a principios, sino disputar el relato del futuro: demostrar que es posible crecer, producir, innovar y, al mismo tiempo, distribuir, cuidar y proteger.

3. Mitos y peligros que debemos enfrentar

Los análisis posteriores a la elección buscan instalar muchas ideas al calor de los resultados, sin embargo, los militantes debemos estar prevenidos de algunos mitos

y trampas con un claro objetivo, algunos de manera interesada, y otros por simple flojera intelectual.

3.1 El mito del pasado electoral glorioso y el presente catastrófico ideal

Las derrotas de este ciclo de elecciones son holgadas, profundas, serias y graves. No hay espacio para la auto indulgencia o la banalización de su importancia, sin embargo, no podemos partir de análisis errados porque las conclusiones van a ser erradas. Uno de estos análisis errados es la idea de que en el pasado la izquierda siempre arrasaba hasta que llegó determinada idea, determinado partido, determinada persona (por ejemplo, el “wokismo”) y entonces por primera vez nos fue mal. No es así, la izquierda chilena no tuvo siempre resultados espectaculares como se suele instalar. **La izquierda tuvo que participar de alianzas muy amplias para obtener triunfos electorales.** La historia muestra avances y retrocesos, triunfos y derrotas profundas.

Por ejemplo, Salvador Allende en su cuarta candidatura, en un momento que recordamos como el de la máxima cristalización de décadas de luchas de la clase trabajadora chilena, obtuvo un 36,63% de la votación nacional, mientras que el Partido Comunista de Chile, obtuvo un 3,19% de los votos en la presidencial de 1999, mismo momento en que la diferencia de votos entre Joaquín Lavín, —en esa época un declarado pinochetista—, y Ricardo Lagos —ya junto a la Democracia Cristiana— fue cercana a los 37.000 votos, a solo 10 años del retorno a la democracia y en el momento que se recuerda como el esplendor de la Concertación.

Idealizar el pasado es peligroso, permite explicar el presente como una desviación, en lugar de asumir que toda trayectoria política tiene ciclos, errores y procesos de aprendizaje. Usar el pasado como refugio nos distrae de un pensamiento serio sobre el futuro.

3.2 El problema de la frase “La izquierda abandonó a la clase trabajadora y por eso le va mal”

Hay otra frase que reaparece cíclicamente en la izquierda desde hace al menos veinte años: “*la izquierda abandonó a la clase trabajadora*”. La frase en ciertos círculos es garantía de aplauso y aura de lucidez.

Este fenómeno no es nuevo ni propio de Chile, en todos los países de occidente, después de cada elección en que las derechas avanzan hay alguien que pronuncia esta frase pretendiendo que ha descubierto el problema y la solución de este.

El problema de esta frase es que omite preguntas relevantes: ¿qué es la clase trabajadora hoy?, ¿quién se define a sí mismo de clase trabajadora?. La clase trabajadora mutó, y se omiten fenómenos como la estructura informal del trabajo, los cientos de miles de personas que trabajan vinculadas a aplicaciones de

millonarios tecnológicos, lo que significan nuevos trabajadores migrantes, o el hecho de solamente el 19,9% de los trabajadores están afiliados a un sindicato, que en las micro y pequeñas empresas solamente el 1,3% tiene sindicato, y que, en el país, solamente el 3,9% de las empresas tienen un sindicato. Los individuos ya no vinculan su identidad exclusivamente con la posición que ocupan en su relación con el trabajo, que es cada vez más informal, precario e itinerante. Por eso el gran error de la frase es que pone el foco en la izquierda y no en la clase trabajadora. Y no es que la frase no sea cierta, es que es absurdo presentarla como si existiera un botón que si alguien quisiera apretarlo, sencillamente ganaría las elecciones.

¿Cuál es el pecado de la izquierda? ¿Haber cambiado o no haber cambiado? La respuesta no es sencilla. La izquierda en Chile sigue empujando el aumento del salario mínimo, la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral, y otros derechos, y la derecha se opone sistemáticamente a estos avances. Puede ser que el problema no sea que la izquierda haya cambiado su agenda, sino que esta agenda no es capaz de dar cuenta de la diversidad de intereses y de subjetividades presentes en los sectores populares.

3.3.- El peligro del "sí, pero yo no"

En el nuevo ciclo aparece un riesgo político mayor: la tentación de deslindar responsabilidades y salvar trayectorias individuales a costa del proyecto colectivo. Funciona del siguiente modo: Nuestros adversarios de manera totalmente interesada diseñan la idea más dañina posible acerca de la izquierda, y algunos de los nuestros en vez de matizarla o enfrentarla, la aceptan por completo, para decir que efectivamente todo eso que se dice de la Izquierda es cierto, pero no se aplica a ellos mismos. Ese "sí, pero yo no" —yo advertí, yo no estuve, yo me desmarqué— puede volverse una coartada cómoda, incluso rentable en el corto plazo, pero profundamente dañina en lo estratégico.

No es casual que esa actitud reciba aplausos del adversario. Muchos medios de derecha estarán siempre disponibles para amplificar esas voces, ofrecer tribuna y celebrar a quienes rompen el "nosotros" desde dentro, en la medida en que el motivo del quiebre sea la aceptación del marco que ellos mismos diseñaron. Ese reconocimiento puede dar la sensación de lucidez, valentía o independencia, pero te deja imposibilitado de hacer algo útil con ese aplauso obtenido.

Si esa lógica se impone, puede impedir incluso la conformación de una coalición progresista hacia 2026. Es decir, puede impedir que exista una coalición unida para ser oposición democrática y sólida al gobierno entrante.

3.4.- La teoría sobre la instalación de un nuevo clivaje

Luego de la elección del pasado 14 de diciembre, se comenzó a instalar por una serie de analistas y columnistas la tesis de que el clivaje "Apruebo-Rechazo" había reemplazado al del "Sí-No", de 1988. Es conveniente revisar este argumento, que resulta funcional a las fuerzas conservadoras. Vamos por parte:

En primer lugar, el clivaje de 1988 ya no estaba presente hacía mucho tiempo. No estaba en el estallido social, o la Convención Constitucional. Tanto así, que en 2021, los partidos que sostuvieron al "Sí" y al "No" en 1988 quedaron fuera de la segunda vuelta electoral, en el caso de los partidos del Sí, lo hacían con un candidato que años atrás era dirigente de la Democracia Cristiana, el clivaje llevaba mucho tiempo roto, tanto así, que incluso durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, con una coalición ampliada, un grupo escindido de la Democracia Cristiana se opuso a sus reformas.

No es posible, por tanto, que este supuesto clivaje de 2022 haya "reemplazado" a uno que ya no estaba vigente, en un momento en que la emergencia de actores sociales y políticos fuera de la lógica transicional —como el Frente Amplio y el Partido Republicano— ya daban cuenta del agotamiento de la capacidad explicativa del clivaje con bastante antelación al proceso constitucional.

Esta lectura le resulta particularmente conveniente a la derecha porque permite declarar agotado el conflicto sin asumir sus causas. Si el eje ahora es *estallido versus orden*, entonces toda crítica estructural puede ser asociada al exceso, la irresponsabilidad o el desborde. La derecha se presenta así como garante de normalidad, mientras desplaza el debate desde las desigualdades, el trabajo, la seguridad social o la concentración del poder hacia una discusión moral sobre el pasado reciente.

Y si vamos a los números, el clivaje del "No" y su 56% se mantuvo en la elección parlamentaria y presidencial de 1989, en la elección de diputados de ese año (sumando a la Concertación y el partido PAÍS), en la presidencial de 1993, donde Frei incluso supera ese 56%, que luego se repite en concejales en la municipal de 1996, y es un número al que se llega sumando a la concertación y la izquierda en la parlamentaria de 1997.

Mientras que el supuesto clivaje del rechazo, del 62% el 4 de septiembre de 2022, solamente se repitió en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023, pero pocos meses después, las "fuerzas del rechazo" solamente logran un 44% con él "a favor", y la suma de las derechas en la elección de concejales se acerca al 56%, y Kast es elegido presidente con un 58%, mientras que las candidaturas que habían estado por el rechazo sumaban un 70% en la primera vuelta.

Por otro lado, la evidencia electoral bajo voto obligatorio obliga a tener mayor cautela. Desde que existe la inscripción automática y el voto obligatorio, la derecha ha ganado casi todas las elecciones, esa es una forma de verlo, otra sería que la oposición ha ganado todas las elecciones. No hemos visto aún al nuevo electorado obligatorio reaccionando a una derecha oficialista. Eso sugiere que no hay un clivaje consolidado operando de forma estable, sino un electorado aún volátil, poco capturado por los relatos dominantes y sensible a coyunturas más que a identidades rígidas.

El error, entonces, no es afirmar que el clivaje del *Sí* y *el No* ya no ordena la política. El error es creer que otro clivaje ya ocupa su lugar de forma definitiva. Esa conclusión clausura prematuramente la disputa y renuncia a pensar nuevos ejes de

articulación social y política. En política, cuando alguien declara que los clivajes se acabaron, casi siempre está intentando fijar uno que le resulta favorable.

3.5.- ¿Por qué pareciera que Chile es el único país del mundo que no tuvo pandemia?

Un caso evidente de instalación de marcos de análisis deshonestos e interesados es la atribución al estallido social de consecuencias que en realidad provienen de la pandemia. Se ha vuelto común escuchar que la crisis económica, el deterioro fiscal o el aumento de la incertidumbre serían "*herencia del estallido social*", como si existiera una relación causal directa y evidente.

La pandemia generó una recesión mundial, interrupciones en las cadenas de suministro, inflación global y crisis fiscales en prácticamente todos los países. Sin embargo, parte del mundo del columnismo toma dos fenómenos que coinciden en el tiempo —estallido y pandemia— y los une en un relato conveniente: "*esto es consecuencia del estallido*".

¿Para qué? Para instalar en el recuerdo que luchar contra lo que es injusto, trae consecuencias negativas. Y una vez instalado que el estallido fue esta especie de política pública impulsada por la izquierda, establecer que todas las consecuencias negativas de la pandemia, son también, culpa de la izquierda.

Este mismo error de causalidad aparece cuando se habla de Carabineros. Se instala la idea de que el estallido habría producido un daño estructural e irreversible a la institución, como si su debilitamiento y su recuperación dependieran exclusivamente de ese momento. Esa lectura omite deliberadamente la trayectoria previa y posterior.

Antes del estallido, Carabineros ya venía golpeado. En noviembre de 2018, tras el asesinato de Camilo Catrillanca, su aprobación era de 39%. En febrero de 2018, luego del fraude y la Operación Huracán, rondaba el 40%. Incluso en agosto-septiembre de 2017, en plena crisis por Huracán, estaba en torno al 45%. Es decir, la institución llegaba al estallido con una legitimidad erosionada por hechos graves y acreditados, previos al estallido y previos a los tuits de políticos de izquierda que supuestamente erosionaron la legitimidad de carabineros, para luego con ellos, supuestamente aumentar el crimen organizado. Sí, todo a partir de un tweet.

Reducir toda esta trayectoria a una explicación unicausal "*todo es culpa del estallido*" es una simplificación funcional, que borra las responsabilidades previas, invisibiliza la pandemia y omite los procesos de reconstrucción posteriores. Una vez más, la correlación no es causalidad. Y cuando esa confusión se repite con tanta insistencia, conviene preguntarse a quién le sirve.

3.6 La búsqueda del centro político

Bajo la premisa interesada de que "*Chile estaba cansado de los extremos*", y que añoraba el centro político, surgieron partidos como el Demócrata y Amarillos; ambos incapaces de constituirse/sostener su legalidad, con liderazgos que a pesar de la tribuna desproporcionada que les entregó la prensa terminaron siendo irrelevantes electoralmente.

Los resultados de la elección presidencial son expresivos: se impone una candidatura perteneciente a un extremo, que discursivamente se posicionó desde la vereda de los cambios radicales más que de un retorno a fórmulas moderadas propias del escenario transicional.

Lo complejo para el progresismo es haber terminado simbolizando la defensa de cierto status quo ante la demanda de cambio por parte de la ciudadanía. Con esto no quiero decir que la gente quiera extremos, quiero decir que esa línea que trazan de derecha a izquierda, con un centro entremedio, ya no explica la relación de la mayoría de la sociedad con la política y que el centro si solo se trata de ser equidistante de las puntas, sin una propuesta de centro atractiva, sin un proyecto país de centro, con liderazgos de centro atractivos, da lo mismo.